

Roberto Gargarella

Las teorías de la justicia después de Rawls

Un breve manual
de filosofía política

 **PAIDÓS**
Barcelona • Buenos Aires • México

ble que los ciudadanos terminen suscribiendo concepciones religiosas y filosóficas diferentes: la razón práctica —afirma Cohen— «operando bajo las favorables condiciones proveídas por las libertades básicas, no produce una convergencia en las concepciones evaluativas» de las distintas personas.²¹

El «CONSENSO SUPERPUESTO»

Frente al cuadro descrito en la sección anterior —donde veíamos que las sociedades modernas se distinguen por la presencia de un «pluralismo razonable» de concepciones del bien—, el principal intento de *PL* es el de mostrar que aún en dicho contexto es posible construir una concepción de justicia compartida y que funcione. Para ello, Rawls se propone sobrepasar los desacuerdos entre la multiplicidad de doctrinas existentes, e identificar las bases posibles de un acuerdo suficientemente amplio (como para abarcar principios sustantivos) y profundo (como para incluir concepciones de la persona y la sociedad).²²

Con dicha finalidad en mente, Rawls presenta su teoría, ahora, como una concepción «política» de la justicia. El hecho de defender una concepción «política» de la justicia, no significa que la misma sea completamente distinta o, mucho menos, opuesta, a una concepción «moral». Como dice Rawls, la concepción política de la justicia es una concepción moral, pero «elaborada en relación con un objeto más específico»: «las instituciones políticas, sociales, y económicas». En definitiva, se trata de una concepción que se refiere a la estructura básica de la sociedad, y no se extiende, por ejemplo, a normas acerca de nuestra conducta personal o ideales de vida.

El rasgo citado —una concepción limitada en cuanto al sujeto del que se ocupa— constituye una de las características definitorias de una con-

cepción política de la justicia que pretenda convertirse en el foco de un acuerdo social.²³ Pero Rawls menciona al menos otras dos características distintivas de tal concepción. Por un lado, la misma debe aparecer como capaz de «autosostenerse». Esto es, debe mostrarse como una concepción independiente de cualquier doctrina abarcativa particular (el kantismo, el utilitarismo, el cristianismo, etc.). Y además, su contenido debe expresarse en términos que sean familiares a la ciudadanía, en el sentido de estar basado en ideas implícitas en la cultura política de una sociedad democrática.

Por otro lado —y en lo que constituye, seguramente, la innovación más importante destinada a dotar de estabilidad a la teoría—, Rawls apela ahora a un «consenso superpuesto» (*overlapping consensus*) destinado a hacer posible que concepciones abarcativas razonables y opuestas confluyan en ciertos acuerdos básicos —confluencia ésta que la «teoría de la justicia» impediría, al estar basada en una concepción comprensiva particular—. ¿En qué consiste, entonces, esta idea del consenso superpuesto? Según Rawls, el consenso superpuesto hace referencia a un acuerdo entre personas razonables, que sólo aceptan doctrinas abarcativas razonables.²⁶ En este sentido, el consenso superpuesto aparece como la única forma de permitir que, en un contexto «pluralista», cada individuo se llegue a adherir a la concepción pública de la justicia: dicho consenso sólo puede ser alcanzado una vez que la concepción pública en cuestión aparece como razonable o, aun, como verdadera, a los ojos de todos.

Para dejar claro el atractivo propio de este consenso superpuesto, Rawls se apresura a presentar y a la vez responder cuatro objeciones posibles frente al mismo. Las posibles críticas al consenso superpuesto serían las siguientes: primero, sostener que implica una visión escéptica frente a la posibilidad de que una concepción de la justicia sea cierta; segundo, sostener que implica una visión «abarcativa»; tercero, sostener que implica, simplemente, una situación de *modus vivendi*; y cuarto, sostener que constituye una idea utópica. Rawls rechaza una a una tales objeciones, del siguiente modo.

En primer lugar, el pretendido escepticismo del consenso superpuesto es rechazado en virtud de las mismas razones que vienen a darle

25. *Ibid.*, págs. 11-13.

26. Para Rawls, sólo puede hablarse de la producción de dicho acuerdo cuando las personas se «adhieren generalmente a la concepción de la justicia como dando contenido a sus juicios políticos acerca de las instituciones básicas» y cuando, a la vez, «las doctrinas abarcativas irrazonables... no obtienen apoyo suficiente como para socavar la justicia esencial de la sociedad». *Ibid.*, pág. 139.

21. J. Cohen (1994), pág. 598.

22. Conviene decir que, tanto en este énfasis en la búsqueda de un acuerdo amplio entre personas razonables, como en este relativo marginamiento de la idea de la «posición original» como estrategia argumentativa, se reconoce (entre otras) la enorme influencia ejercida por el contractualismo de Thomas Scanlon sobre la teoría de Rawls. Recuérdese que, de acuerdo con la explicación contractualista de la moralidad presentada por Scanlon, un acto es considerado correcto si el mismo es requerido o permitido por principios que ninguna persona, adecuadamente motivada, podría rechazar razonablemente como base de un acuerdo general, informado y no impuesto a través de la fuerza. Véase, al respecto Scanlon (1988). También, consultar Scanlon (1982b) y (1998), cap. 5. Un muy buen análisis crítico, al respecto, en Barry (1995).

23. Rawls (1993), pág. 11.

24. *Ibid.*

origen a dicho consenso: una actitud escéptica o indiferente como la que se sugiere implicaría cerrar la puerta a numerosas concepciones abarcativas e impediría así, desde un comienzo, la posibilidad de alcanzar un consenso superpuesto.

En segundo lugar, la concepción política en cuestión tampoco es «abarcativa», tal como algunos sostienen. En efecto, ella no pretende resolver ni todas ni la mayoría de las cuestiones que pueden plantearse sobre la justicia política, sino sólo unas pocas y, entre ellas, las más urgentes.²⁷ En este sentido, la concepción viene a representar un marco para la reflexión y la deliberación, que nos ayuda a alcanzar acuerdos acerca de las cuestiones constitucionales básicas y las preguntas fundamentales acerca de la justicia.²⁸ Pero, otra vez, la concepción política de la justicia «aparta de su agenda política las cuestiones más divisivas», dado que la disputa en torno a éstas puede llegar a socavar las mismas bases de la cooperación social.²⁹

En tercer lugar, Rawls distingue el consenso superpuesto de una situación de mero *modus vivendi*. Para ello, enfatiza que los acuerdos a los que se refiere siguen siendo, en algún sentido, acuerdos morales y no, meramente, acuerdos firmados por personas o grupos no comprometidos en absoluto con la suerte de los demás. Este último tipo de acuerdos se diferenciarían del consenso superpuesto por razones como las siguientes: a) en primer lugar, el mismo objeto del consenso superpuesto —la concepción política de la justicia— es una concepción moral; b) el consenso superpuesto, además, se afirma sobre bases morales (incluyendo, por ejemplo, ciertas concepciones acerca de la sociedad y las personas, así como principios de justicia) y finalmente, c) el consenso superpuesto tiene de ser más estable, ya que quienes lo afirman no van a dejarlo de lado por el solo hecho de que la «fuerza relativa de su visión dentro de la sociedad se incrementa y, eventualmente, se convierta en dominante».³⁰

Lo señalado resulta significativo, además, porque nos ayuda a reconocer la profundidad (*depth*), el alcance (*breadth*) y la especificidad del mencionado consenso: el mismo es lo suficientemente profundo como para abarcar ideas tales como las de que la sociedad constituye un sistema cooperativo equitativo y las personas son consideradas libres e iguales, razonables y racionales; es suficientemente amplio como para extenderse sobre todas aquellas cuestiones vinculadas a la estructura básica de la sociedad; y se encuentra concentrado sobre una específica concepción política de la jus-

27. *Ibid.*, pág. 156.28. *Ibid.*, pág. 156.29. *Ibid.*, pág. 157.30. *Ibid.*, págs. 146-150.

ticia, como puede serlo —o no— la concepción rawlsiana de «justicia como equidad».³¹

La respuesta de Rawls a la última de las objeciones mencionadas —el carácter presuntamente utópico de la idea del consenso superpuesto— es también interesante, a fin de conocer el carácter progresivo del programa político suscrito por el autor de *PL*. Conforme a Rawls, no es cierto que «no existen las suficientes fuerzas políticas, sociales o psicológicas, necesarias para alcanzar... o tornar estable [el consenso superpuesto]». ³² En su opinión, se puede imaginar una situación de progresivo acercamiento a dicho consenso. Así, Rawls hace referencia a la posibilidad de un pasaje gradual desde una situación de mero *modus vivendi*, hasta lo que denomina un «consenso constitucional», para llegar finalmente al «consenso superpuesto».

En la primera etapa, de un «mero *modus vivendi*», se llega a incorporar ciertos principios de justicia como única forma de concluir permanentes y destructivos enfrentamientos civiles (del mismo modo en que, según Rawls, se aceptó el principio de tolerancia después de la reforma religiosa). En una segunda etapa, los principios de justicia incorporados en la constitución, y reconocidos, más bien, a regañadientes, llegan a ser aceptados por distintas concepciones rivales: se pasa entonces a una situación en la que «la aquiescencia inicial hacia una constitución que satisface [ciertos] principios liberales» se transforma en un consenso constitucional en el cual tales principios son afirmados.³³

El «consenso constitucional» hace referencia a un consenso aún no suficientemente profundo y amplio: no alcanza a principios sustantivos, ni se basa en ciertas ideas acerca de la sociedad y las personas, ni implica haber alcanzado una concepción pública compartida. Fundamentalmente, establece ciertos procedimientos electorales democráticos, orientados a modelar los enfrentamientos políticos dentro de la sociedad; y garantiza ciertos derechos y libertades políticas muy básicas.

Gradualmente, y en la medida en que el éxito del consenso establecido permanece, los ciudadanos van tomando confianza unos con otros. Se llega, así, a una última etapa, en la cual el consenso se muestra como: a) más profundo, al basarse en ciertas ideas particulares acerca de las personas y la sociedad; b) más amplio, hasta abarcar principios relativos a toda la estructura básica de la sociedad —incluyendo, así, ciertos derechos sustanti-

31. *Ibid.*, pág. 149. En las páginas 164 y 167, por ejemplo, Rawls considera como más probable que el foco del consenso sobrepuerto no sea la visión de la justicia como equidad, sino una serie de concepciones liberales algo diferentes de aquella visión.32. *Ibid.*, pág. 158.33. *Ibid.*, pág. 159.

vos como los de una equitativa igualdad de oportunidades y principios relativos a la satisfacción de las necesidades básicas de cada uno—; y c) más específico, concentrándose en una peculiar concepción de justicia. Este consenso más profundo es forzado, paulatinamente, por varias razones.

Por una parte, y una vez que se establece el «consenso constitucional», los distintos grupos políticos que forman parte de la sociedad se ven forzados a trascender su propia concepción del bien, y a apelar —en el foro público— a razones que puedan resultar atractivas para otros que no comparten su visión más abarcativa. Ello es debido a que, para defender cada una de sus posiciones, necesitan ganar el apoyo de una amplia mayoría. Esto les obliga a formular concepciones políticas de justicia, desarrollando ideas que puedan ser aceptables para los demás. De modo similar, en los casos en que existe un sistema de revisión judicial de las leyes, los jueces se ven forzados a desarrollar una concepción política de la justicia a la luz de la cual interpretar la constitución vigente.

Por otra parte, los distintos grupos sociales van a comenzar a ver el marco constitucional existente como demasiado estrecho, lo cual va a generar la aparición de nuevos conflictos: ocurre que dicho marco constitucional no tiende a cubrir ciertas libertades básicas que van más allá de la libertad de pensamiento o de palabra (libertades tales como la libertad de conciencia, de asociación, de movimiento) ni tiende a garantizar la satisfacción de ciertas necesidades básicas (de educación, alimentación, entrenamiento) que permiten a todos los individuos «tomar parte de la vida social y política». ³⁴ La limitación de los derechos, libertades y procedimientos existentes, entonces, tiende a mover a las partes ya sea a modificar la constitución, ya sea a dictar la legislación, de modo que se expandan tales conquistas hasta cubrir las cuestiones constitucionales y temas básicos de justicia aún no atendidos. Para lograr tal objetivo, entonces, los distintos grupos necesitan convencer a quienes no piensan como ellos y, por lo tanto, se ven obligados a desarrollar una concepción política no sólo más profunda sino también más amplia, que haga referencia a la estructura básica de la sociedad. El consenso al que se llega, finalmente, resulta notablemente más amplio y profundo que los acuerdos iniciales de los que se partía: contamos, ahora, con un «consenso superpuesto».

El pasaje de una mera situación de *modus vivendi* a un consenso constitucional, así como el pasaje de aquí a un consenso superpuesto descansa, fundamentalmente, en la concepción de psicología moral que Rawls asume como presente, a lo largo de PL. ³⁵ Según la misma, las personas tienen, junto a («los dos poderes morales») su capacidad para formar una

concepción del bien y su capacidad para aceptar concepciones de justicia y equidad, el deseo de actuar en virtud de tales concepciones. ³⁶

RAZONES PÚBLICAS

El «consenso superpuesto» que Rawls defiende, aparece como una expresión de lo que denomina la «razón pública compartida» por el conjunto de la sociedad. La idea de «razón pública» resulta especialmente importante, para el «nuevo» Rawls, en la explicación de cómo puede ser posible afirmar una constitución justa y estable dentro de una sociedad pluralista. En relación con esta idea conviene señalar que, aunque constituye uno de los principales puntos de apoyo de PL, no representa una modificación tan esencial de la «teoría de la justicia», tal como puede serlo la idea de un «consenso superpuesto». Más bien, como sostiene S. Freeman, la noción de razón pública aparece como una «extensión natural» de ideas tales como la de «contrato social», o requerimientos como el de publicidad, desarrolladas previamente en aquel trabajo. ³⁷ De algún modo, la idea de razón pública viene, simplemente, a desarrollar «el familiar criterio liberal de acuerdo con el cual un gobierno democrático no debería justificar sus políticas apelando a valores religiosos». ³⁸

Ahora bien, ¿qué es precisamente lo que entiende Rawls por la idea de razón y, más específicamente, por la idea de razón pública? La razón de una sociedad política, antes que nada, aparece aludiendo a la forma en que se formulan planes, se fijan las prioridades entre distintos fines, y se toman decisiones, dentro de una sociedad. La razón pública, en cambio, aparece como la razón de los «ciudadanos democráticos», siendo «pública» de tres modos diferentes: a) en tanto la razón de los ciudadanos como tales: es la razón del público; b) en cuanto al objeto que tiene como propio: cuestiones que tienen que ver con el bien público en asuntos fundamentales de justi-

36. Rawls hace referencia a tres tipos básicos de deseos: los que dependen de objetos (por ejemplo, el deseo de comer o dormir, el deseo de estatus, poder, riqueza, etc.); los que dependen de principios (por ejemplo, los que dependen de principios racionales, como el de adoptar los medios más efectivos para conseguir nuestros fines, el de priorizar nuestros objetivos cuando ellos entran en conflicto); y los que dependen de principios razonables, que regulan cómo comportarnos en nuestras relaciones con los demás (como el principio de la fidelidad o el de decir la verdad). Según Rawls, sin embargo, los deseos más importantes, dentro de PL, tienen que ver con deseos dependientes de concepciones, como el deseo de actuar de acuerdo con un ideal formado en referencia a principios racionales y razonables. Aquí desarrollo su idea de una «psicología moral razonable». *Ibid.*, págs. 86 y 163.

37. Véase, en este sentido, Freeman (1994), pág. 647.

38. De Marneffe (1994), pág. 233.

34. *Ibid.*, pág. 166.

35. Esta concepción se explica en PL, *ibid.*, págs. 81-86.